

CONSTANCIA: A despacho del señor Juez el expediente de la acción de tutela de la referencia, con el informe que se encuentra pendiente de emitir la respectiva sentencia. Sírvase proveer.

Manizales, 24 de octubre de 2022

JUAN FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ
SECRETARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES

Manizales, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE	CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN lic2.mdfl@gmail.com
ACCIONADOS	DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
	ÁREA DE SANIDAD CALDAS DE LA POLICÍA NACIONAL
RADICADO	17001-31-03-006-2022-00215-00
SENTENCIA	128

1. OBJETO DE DECISIÓN

Procede el Despacho a proferir sentencia de primera instancia dentro de la acción constitucional de la referencia, cuyo objeto de estudio corresponde a la petición de la salvaguarda de los derechos fundamentales a la **VIDA, DIGNIDAD y SALUD**.

2. ANTECEDENTES

2.1. Pretensiones

El señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN** procura la tutela de los mencionados preceptos constitucionales; como consecuencia de ello que se ordene a las entidades accionadas le realicen las valoraciones de “...AUDIOMETRÍA, MEDICINA INTERNA, CIRUGÍA VASCULAR, OPTOMETRÍA, FISIATRÍA Y ORTOPEDIA” y le proporcione tratamiento integral.

2.2. Hechos

Como fundamento de sus pretensiones el accionante expuso que se encuentra afiliado al régimen especial de seguridad social en salud de la

Policía Nacional, en consulta médica realizada el 2 de agosto de 2022 el médico tratante le prescribió los anotados servicios médicos, no obstante, no le han sido suministrados por parte de las entidades accionadas a pesar que de forma presencial y por medio telefónico solicitó su programación y realización, lo que le genera retrasos en el tratamiento médico que demanda para mejorar sus condiciones de salud.

2.3. Trámite procesal

La presente acción de tutela se asignó a este despacho judicial con reparto del 13 de octubre de 2022 y el 14 de octubre de 2022 fue admitida y la notificación a las partes intervinientes.

2.4. Intervenciones

El **ÁREA DE SANIDAD CALDAS DE LA POLICÍA NACIONAL**, indicó que el señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN** ha tenido acceso a los servicios médicos que le han prescrito los médicos tratantes, que los servicios clínicos que demanda con el actual trámite no han sido proporcionados en virtud a que el mencionado paciente no ha agotado el proceso para que los mismo sean autorizados, programados y realizados, y que no existe justificación alguna para que se disponga cubrimiento de tratamiento integral el cual se configura como una atención futura e incierta.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Debate jurídico

De acuerdo a la situación fáctica plantada, corresponde al Despacho determinar si con ocasión a la conducta observada por las entidades accionadas se vulneran los derechos fundamentales invocados por el señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN** y de encontrarse configurada la vulneración aducida determinar si es procedente conceder el amparo constitucional solicitado.

3.2. Sistema de Seguridad Social en Salud de la Policía Nacional.

Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, a los miembros de la Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y a los beneficiarios de los anteriores, se les concibió un régimen especial que les garantiza la atención en salud que

demandan, el cual debe ser brindado sin ningún tipo de discriminación y en igualdad de condiciones de los demás métodos de atención médica del SGSSS, el que además comprende un acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. La Sentencia T-210 de 2013 al respecto señaló:

“La Ley 100 de 1993, en su artículo 279, consagró distintos regímenes especiales de seguridad social, los cuales están excluidos del Sistema General en Salud, como son los relativos a los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de Ecopetrol y de las empresas en concordato preventivo y obligatorio mientras dure el proceso concursal”...

“(...) El legislador pretendió al establecer los regímenes de excepciones al régimen general de la Ley 100 de 1993: (i) que los derechos en salud contengan beneficios y condiciones superiores a los que rigen para los demás afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la dicha ley y, a su vez, (ii) en ningún caso, consagren un tratamiento discriminatorio o menos favorable al que se otorga a los afiliados al sistema integral general”.

3.3. Principio de integralidad en el acceso a la salud

De otra parte, debe mencionarse que el SGSSS está estructurado en elementos y principios¹ que dan lugar a la materialización del derecho a la salud de cada uno de los afiliados o vinculados al mismo. Así las cosas, el artículo 8 de la ley 1751 de 2015, hace referencia a la integralidad que debe guiar la prestación de los servicios requeridos por los diferentes individuos, ordenamiento que se consagro en los siguientes términos:

“...Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario.

En los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada”.

Canon normativo que a su vez debe ser concordado con lo señalado en el artículo 15 de ley en referencia, que a su tenor literal establece:

Artículo 15. Prestaciones de salud. El Sistema garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su

¹ Ley 1751 de 2015, Artículo 6.

promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas.

Conforme a las normas previamente expuestas, encontramos la satisfacción del derecho fundamental a la salud, no solamente comprende aquellas actividades con miras a la recuperación de la persona que padece determinada patología, esto es su curación, sino comprende además todos los esfuerzos para que, de manera pronta, efectiva y eficaz reciba todos los cuidados médicos tendientes a proporcionarle el mayor bienestar posible² - (Principio de Integralidad). Mandato de optimización³ que integra las decisiones judiciales tendientes a la satisfacción del derecho a la salud; ordenamiento que a su vez presupone dos condiciones: i) que la entidad obligada a prestar el servicio de salud no ha actuado diligentemente y ii) que existe claridad y precisión frente al tratamiento a seguir. Condicionamientos que tienen razón justificativa, en tanto que las decisiones judiciales, no pueden extenderse a situaciones, inexistentes, futuras y precisamente frente a derechos fundamentales no violentados o amenazados. Respecto de este particular, el Tribunal Constitucional preciso:

“El principio de integralidad en el acceso a los servicios de salud se manifiesta en la autorización, práctica o entrega de los medicamentos, procedimientos o insumos a los que una persona tiene derecho, siempre que el médico tratante los considere necesarios para el tratamiento de sus patologías. De ahí que, la atención en salud no se restringe al mero restablecimiento de las condiciones básicas de vida del paciente, sino que también implica el suministro de todo aquello que permita mantener una calidad de vida digna.

En este orden de ideas, por vía de la acción de tutela, el juez debe ordenar la entrega de todos los servicios médicos que sean necesarios para conservar o restablecer la salud del paciente, cuando la entidad encargada de ello no ha actuado con diligencia y ha puesto en riesgo sus derechos fundamentales, siempre que exista claridad sobre el tratamiento a seguir, a partir de lo dispuesto por el médico tratante.

...

Por esta razón, en sede de tutela, se ha considerado que el suministro del tratamiento integral se sujeta a las siguientes condiciones, en primer lugar, que la EPS haya actuado negligentemente en la prestación del servicio, y en segundo lugar, que exista una orden del médico tratante especificando las prestaciones necesarias para la recuperación del paciente, la cual, como se mencionó en el acápite anterior, se convierte en un límite para la actuación del

² Sentencia T-002/16 - Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Al respecto, en sentencia T-617 de 2000[11] esta Corporación manifestó: "En este orden de ideas, el desconocimiento del derecho a la salud no se circunscribe únicamente a la constatación del peligro inminente de muerte, dado que su ámbito de protección se extiende a la prevención o solución de eventos en los cuales el contenido conceptual básico de los derechos fundamentales involucrados puede verse afectado, de esta forma, no solo el mantenimiento de la vida, previsto en el artículo 11 de la Constitución Política, se protege como fundamental, sino la materialización del derecho a la existencia en condiciones dignas". (Negrilla por fuera del texto)

³ Robert Alexy, *Teoría de los Derechos Fundamentales*, citado, pág. 86. normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes.

*juez constitucional, a partir de la aplicación de los criterios de necesidad, responsabilidad, especialidad y proporcionalidad*⁴.

4. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Verificados los hechos que motivaron la presente acción constitucional, se advierte que pese haberse prescrito desde el 2 de agosto de 2022 por los médicos tratantes en favor del señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN** los servicios médicos denominados “*AUDIOMETRÍA DE TONOS PUROS AÉREOS Y ÓSEOS CON EMASCA-RAMIENTO, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA VASCULAR, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRÍA INCLUYE OPTOMETRÍA, TONOMETRÍA Y VALORACIÓN ORTOPTICA LIMITADA O INICIAL, PRESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS O AYUDAS ÓPTICAS VISUALES, EVALUACIÓN ORTOPTICA, ADAPTACIÓN Y AJUSTE DE PRÓTESIS O AYUDAS ÓPTICAS Y CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA*”, no se tiene evidencia que ellos le hayan sido efectivamente realizados en la forma indicada por el galeno tratante..

Lo anterior, en razón a que la entidad accionada manifestó que no se encuentran autorizados, programados y realizados porque no se ha adelantado el proceso pertinente para ello, situación que no puede pasarse por inadvertida, pues la justificación del suministro de los servicios clínicos e insumos médicos se da en razón de las ordenes médica dadas, toda vez que ello es necesario para el mejoramiento de calidad de vida y condición clínica del paciente, de lo que deviene que su falta de suministro efectivo, en la forma y en la periodicidad ordenada conlleva a la vulneración directa de los derechos fundamentales que se pretenden satisfacer, máxime que el accionante en su escrito de tutela manifestó que de forma presencial y telefónica a intentando su programación pero no ha sido posible.

Debe recordarse, que el derecho fundamental objeto de protección, no se limita a aquellas actividades con miras a la recuperación de la persona que padece determinada patología, esto es su curación, sino que comprende además todos los esfuerzos para que, de manera pronta, efectiva y eficaz reciba todos los cuidados médicos tendientes a proporcionarle el mayor bienestar posible; deber legal que tal y como está planteado en el presente litigio fue inobservado por la entidad prestadora de servicios de salud accionada.

⁴ Sentencia T-002/16 - Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

Comportamientos que vale la pena manifestar de forma enfática, desnaturalizan el deber legal de las entidades responsables de custodia de los derechos fundamentales en discusión, de lo cual y sin dubitación alguna es imperioso concluir que hubo una vulneración de los derechos reclamados en favor del actor, no siendo de recibo los argumentos expuestos por la accionada en tanto que la protección del derecho fundamental se da en razón de su materialización, es decir, suministro efectivo de los insumos y servicios médicos prescritos por los médicos tratantes.

En consecuencia se ordenará a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y al Área de Sanidad Caldas de la misma entidad, cada una de acuerdo a sus competencias, le autoricen, programen y realicen efectivamente al señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN** los servicios médicos previamente mencionados, esto es: *“AUDIOMETRÍA DE TONOS PUROS AÉREOS Y ÓSEOS CON EMASCA-RAMIENTO, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA VASCULAR, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRÍA INCLUYE OPTOMETRÍA, TONOMETRÍA Y VALORACIÓN ORTOPTICA LIMITADA O INICIAL, PRESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS O AYUDAS ÓPTICAS VISUALES, EVALUACIÓN ORTOPTICA, ADAPTACIÓN Y AJUSTE DE PRÓTESIS O AYUDAS ÓPTICAS Y CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA”*, en la forma ordenada por el médico tratante desde el 2 de agosto de 2022.

Consecuente con lo anterior, y dado que se imploró el reconocimiento del tratamiento integral, este despacho judicial advierte la necesidad de disponerlo, pues mediante este se procura la satisfacción del derecho fundamental a la salud, y la recuperación de las patologías padecidas, esto es su curación y todos los cuidados médicos tendientes a proporcionar el mayor bienestar posible.

Por lo anterior, es que este judicial encuentra que tal atención es procedente, pues finalmente el querer del accionante es el reconocimiento integral de su derecho a la salud lo que a su vez conlleva su dignificación como persona.

Por lo tanto se ordenará a **DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL** y al **ÁREA DE SANIDAD CALDAS DE LA POLICÍA**

NACIONAL, garanticen al paciente, señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN, TRATAMIENTO MÉDICO INTEGRAL** en salud, en forma oportuna y sin ningún tipo de interrupciones respecto de la patología que la aqueja denominada **“Z718 – OTRAS CONSULTAS ESPECÍFICAS”**, entiéndase con cubrimiento del 100% de los servicios galénicos que se encuentren dentro y fuera del plante de atención en salud, de modo que le brinde una adecuada recuperación, conforme a las prescripciones que los médicos adscritos a la entidad accionada efectúen para tal fin.

De otra parte vale precisar, que la responsabilidad de las entidades administradoras de salud, no solo recae en la prestación de los servicios médicos que ésta realice, como lo son los tratamientos, exámenes, medicamentos y procedimientos; pues en igual forma recaen en sus obligaciones esenciales, todas aquellas atenciones necesarias para la efectiva prestación del servicio de salud, obligaciones que a la luz de la ley y la jurisprudencia la debe soportar la administradora de salud, refiriendo que dicha exigencia no nace de determinación judicial desprovista de justificación, sino que por lo contrario, se encuentra basada en la acreditación de una serie de presupuestos normativos y Jurisprudenciales, fundamentos que dan lugar incluso que se satisfaga la prestación de servicios y tecnologías excluidos de plan básico de atención en salud.

Lo anterior conlleva que tampoco sea necesario la instauración de una vía judicial para su efectiva prestación, ni mucho menos utilizar la misma como vía administrativa por parte de las aseguradoras para facultarse en el recobro de los servicios prestados que estén excluidos del plan de beneficios, en tanto que en el sub examine, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional es una Dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional, cuyo objeto es administrar los Recursos del Subsistema de Salud de la Policía Nacional e implementar las políticas, planes y programas que adopte el CSSMP y el Comité de Salud de la Policía Nacional⁵, toda vez que *“...el funcionamiento y financiación de los fondos-cuenta de los Subsistemas de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se equipara al artículo 218 de la Ley 100 de 1993, en el que se crea y se establece la operación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por lo cual, estima la Sala, la Dirección General de Sanidad Militar, sin necesidad de expresa declaración por parte del juez en el fallo de tutela, podrá obtener los recursos del fondo-cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, como quiera que se trata de un régimen especial que se rige por sus propias normas”*⁶

⁵ Artículo 15 de la Ley 352 de 1997.

⁶ Corte Suprema de Justicia Sentencia STP-20486-2017.

Por lo expuesto, el **JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MANIZALES, CALDAS**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,

FALLA

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la **SALUD** y **VIDA** del señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN** identificado con la **C.C. 75.087.999**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL** y al **ÁREA DE SANIDAD CALDAS DE LA POLICÍA NACIONAL**, cada una de acuerdo a sus competencias, que en el término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta providencia y si no lo han hecho **AUTORICEN, PROGRAMEN** y **REALICEN** al señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN** los servicios médicos denominados ***“AUDIOMETRÍA DE TONOS PUROS AÉREOS Y ÓSEOS CON EMASCA-RAMIENTO, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CIRUGÍA VASCULAR, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA, CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRÍA INCLUYE OPTOMETRÍA, TONOMETRÍA Y VALORACIÓN ORTOPTICA LIMITADA O INICIAL, PRESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS O AYUDAS ÓPTICAS VISUALES, EVALUACIÓN ORTOPTICA, ADAPTACIÓN Y AJUSTE DE PRÓTESIS O AYUDAS ÓPTICAS Y CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA”***, en la forma ordenada por los médicos tratantes.

TERCERO ORDENAR a la **DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL** y al **ÁREA DE SANIDAD CALDAS DE LA POLICÍA NACIONAL**, cada una de acuerdo a sus competencias, le garanticen al señor **CARLOS ANDRÉS CORREA GARZÓN**, **TRATAMIENTO MÉDICO INTEGRAL** en salud, en forma oportuna y sin ningún tipo de interrupciones respecto de la patología que la aqueja, esto es ***“Z718 – OTRAS CONSULTAS ESPECÍFICAS”***.

CUARTO: PREVENIR a los entes accionados sobre las sanciones a que se puede hacer acreedora por el incumplimiento a este fallo de tutela (Art. 52 Decreto 2591 de 1991).

QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz, con la advertencia que podrá ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

SEXTO: ENVIAR el expediente a la **H. Corte Constitucional** para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO ZULUAGA GIRALDO
JUEZ

Firmado Por:
Guillermo Zuluaga Giraldo
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 006
Manizales - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **90646808ddd2abab46aaf0ce31bf86ca4f8bd896fc8ee15f8ad2f1fc9b9df8c4**

Documento generado en 24/10/2022 01:40:04 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>